Partido
Comunista
Ecuatoriano

Septiembre 2025 - Número #9

PODER POPULAR

Órgano de difusión

Ecuador en terapia de shock

Desarrollar las condiciones subjetivas, condición fundamental para derrotar el programa neoliberal

Editorial

Desarrollar las condiciones subjetivas, condición fundamental para derrotar el programa neoliberal

La resistencia reactiva y fragmentada no basta frente al proyecto recolonizador del imperialismo y el gobierno de Noboa. Se requiere un "sí colectivo": un programa revolucionario y socialista unificado que dispute el poder y devuelva al pueblo el control de su destino.

La ingenuidad política sigue siendo uno de los principales obstáculos para la construcción de un verdadero proyecto de transformación en el Ecuador. Mientras el capitalismo en su fase superior, el imperialismo, recrudece su ofensiva a nivel mundial. Muchos líderes sociales y políticos continúan reduciendo la resistencia a una suma de activismos fragmentados, sin horizonte ideológico ni programa de clase. Se limitan a reaccionar frente a los atropellos del capital, sin comprender que el imperialismo norteamericano y sus aliados locales tienen un proyecto integral de recolonización que busca someter al país a los dictados de su hegemonía.

El gobierno de Daniel Noboa es hoy el instrumento más eficiente de esa estrategia. Bajo el disfraz de juventud y progreso, cumple a cabalidad con la agenda de Washington: militarización, sometimiento a los organismos financieros internacionales, entrega de los recursos estratégicos y criminalización de toda forma de organización popular. Su aparato comunicacional crea enemigos internos, desvía el debate hacia lo administrativo y neutraliza cualquier contradicción real de clase. Con una Asamblea comprada y medios de comunicación disciplinados con pauta oficial, Noboa legisla contra la Constitución y ha instalado un sentido común neoliberal que presenta el despojo como modernización y la represión como seguridad.

Ejemplos concretos muestran cómo esta estrategia logra dividir y neutralizar. La lucha contra la megaminería, legítima y necesaria, ha sido reducida mediáticamente a las voces de unos pocos actores oportunistas, que en el pasado acompañaron sin pudor a gobiernos neoliberales, para ejemplo Yaku Pérez. La fragmentación de las luchas en causas parciales, por justas que sean, es parte de la trampa: se invisibiliza la entrega generalizada del territorio, se sustituye la conciencia de clase por la agenda de víctimas y se desvía la atención del objetivo central: desmontar la capacidad del pueblo de disputar el poder.

El proceso de Montecristi en 2008 dejó avances constitucionales importantes: reconocimiento de derechos, planificación participativa, soberanía sobre sectores estratégicos. Sin embargo, al no haberse desmontado la estructura del viejo Estado burgués, buena parte de estos principios quedaron como letra muerta. Hoy, el gobierno incumple la Constitución y vulnera abiertamente los derechos consagrados: recortes sociales en servicios como salud y educación, concentra funciones, subordina la política nacional a intereses extranjeros y amedrenta a la Corte Constitucional para abrir paso a leyes que benefician al capital.

Frente a este escenario, la resistencia reactiva no basta. Defender conquistas parciales es necesario, pero insuficiente. Se requiere una agenda política de clase, capaz de articular luchas dispersas y de disputar el sentido común neoliberal que hoy domina la sociedad.

No basta con decir "no" a las políticas de Noboa; es indispensable construir primero un "sí" colectivo: un horizonte que coloque en el centro la soberanía, la redistribución efectiva de la riqueza y la defensa de los bienes comunes y, segundo, impulsar un programa capaz de llevar a los revolucionarios a la toma del poder político del Estado.

Desarrollar las condiciones subjetivas de la lucha, como la conciencia, la organización y la claridad ideológica, son tareas fundamentales del momento histórico. Solo así la indignación se transformará en fuerza revolucionaria. Solo así podremos demostrar que la salida a la crisis no está en la sumisión al FMI ni en la militarización dictada por Washington, sino en la construcción de un proyecto socialista que devuelva al pueblo el control de su destino.

Debemos entonces, consolidar los espacios de organización con alta capacidad movilizadora; establecer espacios de unidad con sectores auténticamente revolucionarios; definir nuevas formas de comunicación política; ampliar las vocerías sociales y denunciar al imperialismo, el neoliberalismo y su estrategia; denunciar al gobierno y su deliberada destrucción de la capacidad estatal de prestar servicios públicos a favor del pueblo; identificar y denunciar a los oportunistas; consolidar a la militancia disciplinada y consciente para de esa forma cuidar la organización.

Por último, no podemos olvidar que la agenda imperial está articulada con su política de invasión y guerra por ello debemos mantener y profundizar nuestra acción militante en denuncia del genocidio contra pueblo palestino y, sumar todos los esfuerzos para defender la soberanía e independencia de los proyectos populares y socialistas del mundo y en concreto Cuba y Venezuela que soportan el bloqueo y hoy la brutal amenaza militar.

Manuel Paredes Martínez
Secretario General
Partido Comunista Ecuatoriano

Estado burgués represor y sangriento

Los chats confirman la brutal violación de derechos. Denunciamos los falsos positivos para deslegitimar dirigentes.

En las últimas semanas se han hecho públicos los chats de los agentes encubiertos de la Policía Nacional que infiltrados en movimientos sociales y sus actividades, además de investigar y recopilar información personal y familiar de dirigentes y activistas sociales, preparaban acciones de "desaparición" y "captura" de algunos de ellos.

No es una novedad: nuestro Partido sufrió la mayor operación de infiltración y división entre 1957 y 1964 cuando la CIA rompió el Partido y promovió la fundación del PCMLE tal como lo narra Philiph Agee en su libro La CIA Capítulo Ecuador; en la historia más reciente en la ciudad de Cuenca, infiltrados que fueron detectados y expulsados de la Juventud Comunista luego aparecieron como periodistas en Radio Cuenca (Cabrera). En esa misma investigación se descubrió que Carlos Cuenca, recién electo presidente de la FEUE (2007) por el MIU expresión del PCMLE en La universidad de Cuenca, era miembro de la Policía Nacional. Posteriormente la policía asesino a manifestantes entre ellos Damián Peña y Jhonny Montesdeoca, todavía casos impunes. En las movilizaciones del 2019 y 2021, dirigentes de varias organizaciones y de la nuestra en particular, fueron perseguidos y descaradamente con patrulleros afuera de sus hogares y lugares de trabajo, buscaban amedrentarnos, pero no lo lograron.

Tras la detención de dirigentes comunistas, altos mandos de la Policía expresaban que "ser comunista no es un delito, pero

debería serlo". Retenciones en aeropuertos, escuchas telefónicas, retenciones antes o después de las marchas, intimidación con fotografías y videos, insultos, exposición de lugares de concurrencia de militantes y simpatizantes y, muchas otras situaciones son el pan de cada día de los activistas y dirigentes.

Los chats expuestos por el movimiento indígena solo reafirman lo que ya se sabía, sin embargo, se evidencia la brutal acción y violación de los derechos de compañeros y compañeras que han cometido el único delito de enfrentar la injustica de un sistema que oprime al pueblo.

Desde ya denunciamos los intentos de sembrar falsos positivos; acciones planificadas y sembradas para deslegitimar a dirigentes y militantes en el ámbito personal, laboral y el político. Si no nos unimos para identificar estas acciones, al lawfare se sumarán montajes, siembra de duda, promoción del acoso laboral y despidos en el ámbito público y privado y, en algunos casos encarcelamiento, agresiones o incluso la desaparición. Hoy la solidaridad es la herramienta para frenar la agresión Estatal.

Recordamos también que, en los últimos años, la policía ha infiltrado a organizaciones y los ha llevado a cometer errores tácticos y políticos, así como a participar de agendas infantiles y aventureras para exponerlos y detener a sus dirigentes; algunos de esos agentes seguirán campantes y desapercibidos en esas organizaciones.

Es tiempo de unidad, de consolidación de nuestras herramientas políticas y también de desatar la más profunda solidaridad para cuidar al pueblo que lucha y a sus dirigentes.

Despidos y reducción del Estado: la factura social del FMI

"Los despidos y la 'reducción' de funcionarios públicos supusieron el despido de más de 5000 personas, con proyecciones a cuatro años cercanas a los 60 000. Se trata de una medida que ataca la capacidad estatal para cumplir con los servicios que prestan las diversas carteras de Estado, en particular la gestión de sectores estratégicos y la prestación de servicios de salud, educación y planificación."

Ecuador atraviesa un acelerado proceso de desarticulación de lo "público", entendido desde la dinámica del Estado de bienestar capitalista, en el cual las recetas de la banca internacional (FMI) agudizan y profundizan un programa de gobierno neoliberal. Los sectores oligárquicos agroexportadores y financieros que controlan el país se encuentran subyugados a las dinámicas de la banca transnacional, la cual lucra con la colocación de bonos financieros —tanto públicos (bonos soberanos) como privados— en el mercado internacional.

Bajo este contexto, no puede perderse de vista que el programa económico impuesto a Ecuador —que incluye recorte del gasto público, liberalización de mercados, entre otras medidas— es evaluado por la banca privada internacional (Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, etc.) mediante el indicador de "riesgo país". Este mide la confiabilidad de un Estado frente a sus acreedores; es decir, si sus condiciones internas son óptimas para el pago de intereses y capital. Evidentemente, este indicador se convierte en una herramienta de chantaje y control político por parte de entes financieros vinculados a capitales estadounidenses.

Por lo tanto, lo que vive Ecuador responde, en última instancia, a una operación económico-financiera para el enriquecimiento de la banca internacional, en complicidad con los tenedores de bonos nacionales (banca privada) y en detrimento de los servicios y recursos públicos. Esto significa la destrucción del Ecuador del "Buen Vivir".

Este proceso busca, además, romper los límites institucionales establecidos por la Constitución de 2008, lo que ha motivado al gobierno de Noboa a enfrentarse incluso a la Corte Constitucional, organismo garante del control de constitucionalidad de todos los actos derivados del poder público.

En términos económicos, los despidos y la "reducción" de la masa de funcionarios públicos (presentada ante la ciudadanía como una medida para mejorar la eficiencia y reducir la corrupción) supusieron el despido de más de 5000 personas, con proyecciones a cuatro años cercanas a los 60 000 funcionarios. Se trata de una medida que ataca la capacidad estatal -ya mermada tras varios años de desfinanciación de lo público- para cumplir operativamente con los servicios que prestan las

diversas carteras de Estado y en particular la gestión de sectores estratégicos y la prestación de servicios de salud, educación, planificación, etc.

Uno de los sectores más afectados es, sin duda, Petroecuador EP, la empresa más rentable de Ecuador, que sufrió 1256 despidos entre técnicos, personal logístico, administrativo y otros. Esto evidencia una tendencia preocupante, sobre todo en un sector ya golpeado por la falta de inversión y mantenimiento de su infraestructura, como sucedió con los oleoductos del SOTE. Lo ocurrido es tan grave que desencadenó un "paro petrolero" con pérdidas de más del 90% de la producción durante varios días, lo que afecta profundamente las proyecciones presupuestarias para 2025 y los años siguientes.

En la misma línea, la proyección de gastos e ingresos según fuentes oficiales presenta un desbalance: para el primer semestre de 2025, los ingresos se estancaron en 11.253 millones de dólares, mientras que los gastos ascendieron a 12.997 millones. Esto contrasta con los dos años anteriores, en los que la situación fue inversa. El alza en el gasto público no se refleja en la ejecución presupuestaria de ministerios y secretarías clave como salud, educación, transporte u obras públicas, sino más bien en el pago puntual de bonos internacionales (deuda) adquiridos con el FMI y otros acreedores.

Como puede evidenciarse, el discurso del gobierno sobre el ahorro y la mejora en la calidad de los servicios mediante la lucha contra los "malos" funcionarios no es más que la ejecución de un plan económico marcado desde el exterior. Su objetivo es controlar e intervenir en Ecuador desde una dinámica imperialista que no comienza ni termina en el FMI, sino que responde a la política de seguridad de Estados Unidos respecto a Ecuador, aprobada en 2022 en la denominada "Ley Ecuador" y la apropiación de los sectores estratégicos del país, en definitiva el robo de la soberanía nacional.

Amordazar la justicia:
el asedio a la Corte Constitucional

"El gobierno ha intensificado su retórica mediante una falsa dicotomía 'estar con el país o con sus enemigos', un recurso típicamente fascista para suprimir el disenso. El anuncio de una consulta popular para enjuiciar políticamente a los jueces es la culminación de esta estrategia: se instrumentaliza la democracia para someter al decisionismo de una sola autoridad y allanar el camino hacia medidas autoritarias."

El gobierno de Daniel Noboa, en su afán por construir una imagen de mano dura y consolidar un poder ejecutivo fuerte, ha emprendido una ofensiva calculada contra la Corte Constitucional. La reciente marcha y todo el aparato mediático desplegado es la evidencia de una estrategia para probar los límites de cualquier barrera institucional que pueda oponérsele y preparar el terreno para su sometimiento.

Este comportamiento es clásico en los regímenes capitalistas: la creación de un enemigo interno (sea la delincuencia, una institución o un sector social) funciona como un mecanismo de distracción y justificación para avanzar hacia formas de gobierno más autoritarias. El objetivo final es despejar cualquier obstáculo que impida la implementación de leyes que sirvan a los intereses de la clase dominante. En este sentido, los meses de agosto y septiembre serán cruciales por las normas que serán sometidas a revisión de constitucionalidad (Solidaridad Nacional, Integridad Pública, Ley de Inteligencia)

Entre estas normativas, destacan varios temas preocupantes. La Ley de Integridad Pública, por ejemplo, bajo el pretexto de mejorar la eficiencia en la gestión, establece mecanismos de evaluación que pueden servir para desmantelar el servicio público. Asimismo, la ley de Solidaridad Nacional cambia el régimen de juzgamiento para niños, niñas y adolescentes y genera una amnistía en caso de conflicto armado, estos factores buscan, respectivamente, otorgar impunidad a las fuerzas represivas del Estado, sin resolver los problemas de reclutamiento de NNA. Por otro lado, la Ley de Inteligencia simplemente legaliza y expande prácticas de vigilancia que el gobierno ya venía realizando de manera arbitraria.

Frente a este escenario, es imprescindible realizar un análisis de clase riguroso de la Corte Constitucional. Esta institución es, en efecto, un pilar del Estado burgués: su función última es garantizar la estabilidad del marco legal que sustenta la dominación de clase. Su historial de complicidad, como avalar tratados de cooperación militar con potencias imperialistas como Estados Unidos, demuestra que opera como "mediadora" y legitimadora de los intereses del capital. Sin embargo, en su rol de "guardiana de la Constitución", puede convertirse en un contrapeso

temporal. La Constitución, aunque es un proyecto político institucional, contiene derechos y límites al poder conquistados históricamente por el pueblo. Defender estas garantías formales frente a un ataque reaccionario es una necesidad táctica.

El gobierno ha intensificado su retórica mediante una falsa dicotomía "estar con el país o con sus enemigos", un recurso típicamente fascista para suprimir el disenso y criminalizar la oposición. El anuncio de una consulta popular para enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional es la culminación de esta estrategia: se instrumentaliza la democracia para someter al decisionismo - decisión política por encima de la norma - de una sola autoridad. Esta consulta no es más que un mecanismo para allanar el camino hacia más medidas autoritarias, como la imposición de las bases militares o el trabajo por horas. Por eso, desde ya, debemos impulsar un rotundo NO a esta consulta.

La lucha entonces no es por defender en si a la Corte Constitucional o sus jueces, sino contra el gobierno de Noboa y los intereses del capital que representa. Impugnar la inconstitucionalidad de estas leyes es, en el actual momento histórico, un margen de acción necesario en una guerra de posiciones más amplia.

No nos equivoquemos: comprendemos la naturaleza de clase de la Corte, pero la defensa táctica de ciertos derechos es importante en el marco del espacio institucional. Esta resistencia debe servir para la acumulación de fuerzas, la unidad popular y la construcción de una plataforma capaz de enfrentar la ofensiva autoritaria y preparar las condiciones para una verdadera alternativa política.

Gobierno de Noboa:
ignorancia y estupidez
en la gestión de la salud

La centralización, en lugar de resolver el desabastecimiento, abre espacio para nuevos monopolios de importación y distribución. Este esquema favorece a grandes proveedores privados y reduce la capacidad de respuesta de hospitales y distritos frente a las necesidades específicas de cada territorio.

El reciente anuncio del gobierno sobre la centralización de compras de medicamentos e insumos médicos, acompañado de un incremento presupuestario de 63 millones de dólares, ha sido presentado como un giro hacia la eficiencia. Sin embargo, un análisis detallado muestra que esta medida no compensa el recorte previo de más de 70 millones de dólares al presupuesto en fármacos, y que sus efectos pueden agravar los problemas estructurales del sistema de salud.

La centralización, en lugar de resolver el desabastecimiento, abre espacio para nuevos monopolios de importación y distribución. Actualmente, el Estado carece de la capacidad logística para manejar de manera eficiente la compra y distribución nacional de medicamentos. En estas condiciones, el esquema favorece a grandes proveedores privados y reduce la capacidad de respuesta de hospitales y distritos, que hasta ahora podían realizar adquisiciones de acuerdo con las necesidades específicas de cada territorio.

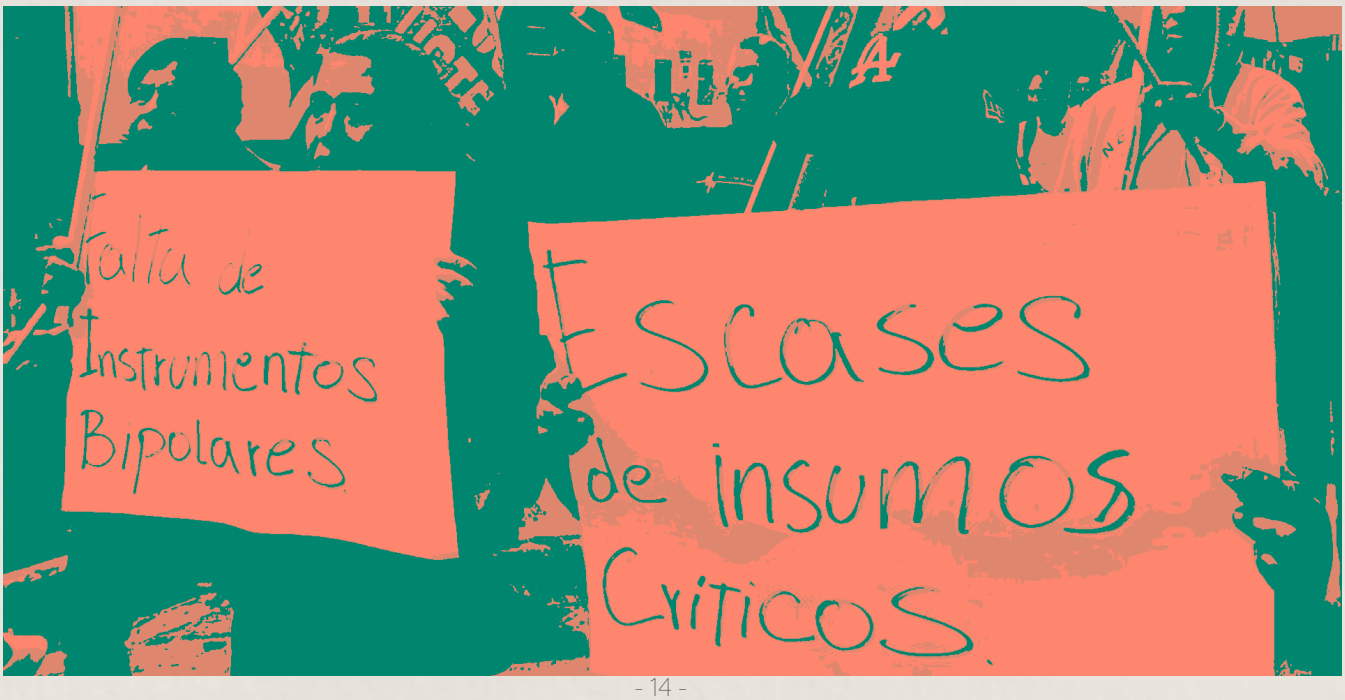
El Decreto 108 del 19 de agosto de 2025 marca un retroceso sustancial respecto al modelo de gestión desconcentrada instaurado en 2012. Dicho modelo,

aunque imperfecto, buscaba fortalecer la cercanía con los usuarios y las particularidades locales. Al concentrar la toma de decisiones en pocos funcionarios del nivel central, se generan riesgos adicionales: lentitud en los procesos, desajustes entre oferta y demanda, e incremento de la ineficiencia administrativa.

A ello se suma la contradicción normativa: mientras la Constitución establece la desconcentración de la gestión pública como principio rector, el actual decreto concentra funciones y resta competencias a los niveles locales. La duplicación de instancias decisorias, como el nuevo comité creado por decreto, genera superposición de responsabilidades y confusión en la rectoría del sistema.

El país enfrenta un cuadro preocupante: subejecución presupuestaria, debilitamiento de la red pública, despidos de personal de salud y acumulación de deudas en servicios esenciales como la diálisis renal. En un contexto de creciente violencia social y precarización laboral, estas medidas deterioran aún más la capacidad de respuesta del sistema frente a las necesidades de la población.

Más allá de los anuncios mediáticos, el verdadero desafío es recuperar la planificación técnica, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y cumplir con el mandato constitucional de destinar al menos el 4% del PIB a salud. De lo contrario, la salud pública seguirá dependiendo de parches coyunturales y de lógicas de mercado que profundizan la inequidad en el acceso a derechos básicos.



Las causas sin ideología, cómplices de la tragedia

Las luchas aisladas, sin horizonte ideológico y perspectiva de clase, se convierten en cómplices involuntarias del orden neoliberal al no cuestionar las estructuras que reproducen la explotación. La fragmentación desactiva su potencial revolucionario.

En el panorama político contemporáneo asistimos a la proliferación de múltiples causas, movimientos y luchas parciales que emergen en torno a problemas concretos: la defensa ambiental, la lucha contra la violencia de género, el reconocimiento de minorías, la denuncia contra los abusos estatales o corporativos. Cada una de estas causas es justa en sí misma y porta en su núcleo un reclamo legítimo de dignidad humana. Sin embargo, cuando estas luchas se desarrollan de manera aislada, desligadas de una visión de totalidad y carentes de un horizonte ideológico claro, se corre el riesgo de convertirlas en cómplices involuntarias de la tragedia que buscan enfrentar.

Las tendencias liberales, con su capacidad para fragmentar la experiencia social, han logrado reducir el conflicto político a un mosaico de activismos parciales. Así, la potencia transformadora de las luchas se diluye en campañas sectoriales que muchas veces terminan subsumidas en la lógica del mercado o en el asistencialismo del Estado. Una movilización que carece de perspectiva de clase puede ganar visibilidad mediática o incluso victorias legales parciales, pero no toca las estructuras que producen y reproducen la explotación y la dominación. De este modo, la causa justa deviene paradójicamente en la estabilidad del orden neoliberal.

La asociación de víctimas, tan necesaria para resistir en lo inmediato, suele convertirse en terreno fértil para la despolitización. Cuando el eje articulador de la lucha es el dolor compartido, pero no la conciencia de clase, lo que emerge es un sujeto político frágil, vulnerable a la cooptación y sin capacidad de trascender el momento episódico del agravio. La memoria de la injusticia se transforma en demanda de reconocimiento simbólico antes que en proyecto de emancipación. Esta es la trampa de las convergencias aparentes: juntar lo diverso sin un horizonte común que oriente la acción colectiva hacia la transformación radical de las condiciones sociales.

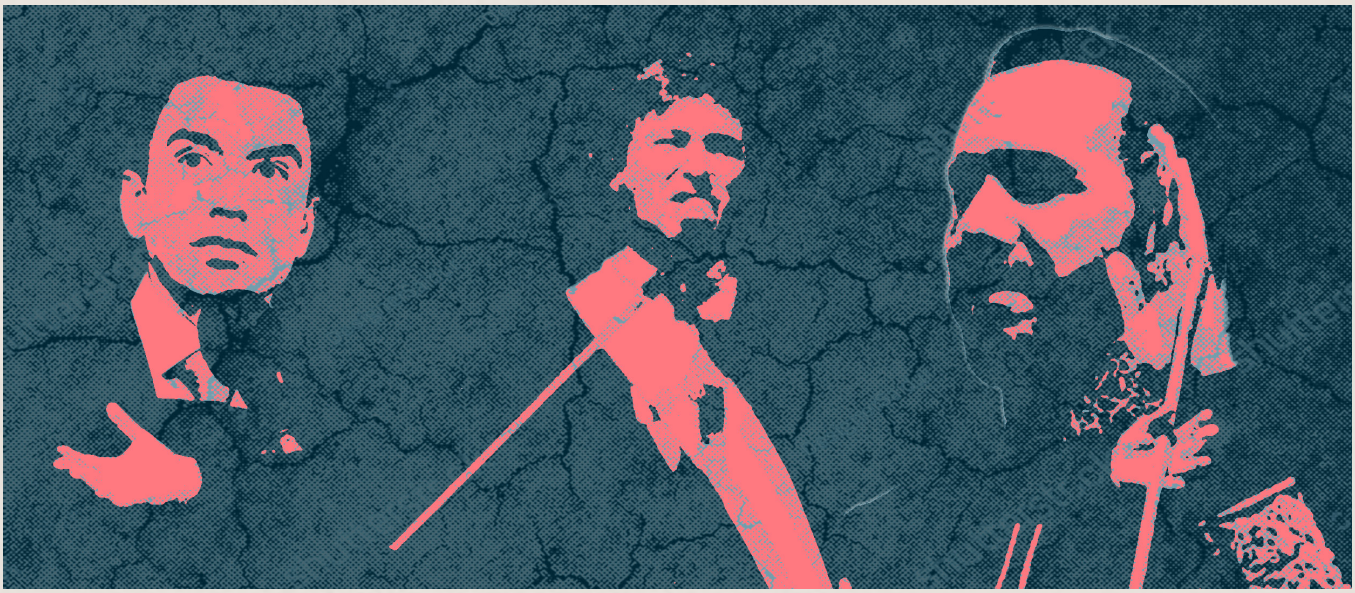
De ahí que las resistencias carentes de orientación programática terminan atrapadas en un círculo de impotencia. Se manifiestan, denuncian, interpelan, pero no avanzan en la construcción de un poder social capaz de alterar la correlación de fuerzas. En este terreno, el liberalismo triunfa al desactivar

la potencialidad revolucionaria de las luchas, imponiendo un marco donde todo reclamo cabe, siempre y cuando no cuestione el núcleo de la dominación capitalista.

Frente a esta fragmentación, se vuelve imprescindible recuperar la centralidad de la ideología. El marxismo nos recuerda que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Esto no significa imponer un dogma cerrado, sino sostener una perspectiva que permita conectar cada lucha particular con la totalidad del proceso histórico. La explotación laboral, la violencia patriarcal, el extractivismo ambiental o la represión estatal no son problemas desconectados, sino expresiones de un mismo modo de producción que organiza la vida social en función del capital.

La tarea, entonces, es sostener de forma creadora y transversal los planteamientos marxistas dentro de la activación política. Creativa, porque no se trata de repetir fórmulas del pasado, sino de reinterpretar críticamente la tradición para responder a los desafíos de nuestro tiempo. Transversal, porque la perspectiva de clase debe atravesar todas las luchas, no para negarlas, sino para darles densidad política, horizonte histórico y capacidad de articularse en un proyecto común.

Solo así las causas dejarán de ser islas y podrán convertirse en ríos que confluyen en la gran corriente emancipadora. De lo contrario, la política seguirá reducida a la administración del malestar, y las luchas, a paréntesis en la continuidad de la tragedia. Como afirmaba Gramsci, "la crisis consiste en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer". La misión histórica es, precisamente, parir lo nuevo, y ello exige que cada lucha particular se reconozca en la totalidad de la lucha de clases.



El fascismo neoliberal en la región:

Milei, Bukele, Noboa

La ofensiva neoliberal en América Latina ha encontrado en los discursos fascistas su mejor aliado. No se trata de una coincidencia ni de una anomalía, sino de la forma en que el capital reorganiza su dominación en tiempos de crisis estructural. Cuando las recetas neoliberales han dejado a los pueblos devastados —con desempleo, precarización laboral, migración forzada y violencia social—, los medios de comunicación hegemónicos construyen un framing que presenta el autoritarismo punitivo como la única salida posible.

Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Noboa en Ecuador representan variantes de un mismo modelo: el fascismo neoliberal. Los tres se sostienen sobre la exaltación del miedo, la criminalización de la protesta y la concentración del poder en figuras que se autoperciben como "redentoras" frente a la corrupción de la política tradicional. Pero detrás del espectáculo mediático y la retórica mesiánica, lo que se oculta es la aplicación descarnada del recetario del Fondo Monetario Internacional, el desmantelamiento del Estado social y la subordinación a los intereses del imperialismo norteamericano.

El papel de los medios es decisivo en este proceso. No solo difunden la narrativa de "orden

y progreso" que legitima las medidas de excepción, sino que construyen un sentido común donde el fascismo se presenta como modernidad, innovación o eficiencia. En Argentina, los despidos masivos y la represión a las huelgas se presentan como medidas "valientes" de Milei frente a un Estado "obeso". En El Salvador, las cárceles masivas y la suspensión de garantías constitucionales son transmitidas como un "milagro" de seguridad. En Ecuador, la militarización de los barrios populares y el alineamiento servil con Estados Unidos son mostrados como "respuestas" a la inseguridad y al narcotráfico. El resultado es claro: el neoliberalismo se legitima no por sus efectos sociales sino por el terror a cualquier alternativa.

Este fenómeno debe ser nombrado con precisión: fascismo neoliberal. Un fascismo que no surge de camisas negras ni de marchas militares, sino del marketing político, de la gestión comunicacional y del entretenimiento. Un fascismo que convierte a la democracia en un decorado, a los parlamentos en oficinas de trámite y a las constituciones en papel mojado. Un fascismo que, en su versión latinoamericana, se disfraza de juventud, frescura o innovación, pero que en esencia es la continuidad brutal de la necropolítica.

Lo más preocupante no es solo la deriva autoritaria de estos gobiernos, sino la naturalización social de sus prácticas. Los pueblos, agotados por la crisis, ven en estas figuras una promesa de orden, aunque sea a costa de sus libertades. Se instala así una paradoja trágica: la víctima aplaude al victimario, el explotado legitima al explotador, el ciudadano renuncia a sus derechos en nombre de una falsa seguridad.

Frente a este escenario, la tarea de la izquierda y de los movimientos sociales es clara: desmontar el relato fascista y disputar el sentido común. No basta con denunciar los atropellos; es necesario construir tejidos sociales capaces de devolverle al fascismo lo que siempre debió tener: vergüenza. Que ser fascista vuelva a ser sinónimo de barbarie y no de éxito. Que la sociedad sienta repulsión ante la violencia institucionalizada y no fascinación. Que la dignidad vuelva a ser más atractiva que el miedo.

La historia enseña que el fascismo nunca se derrota solo en las urnas ni en los tribunales; se derrota en la conciencia colectiva, en la organización

popular, en la capacidad de los pueblos de decir "no pasarán". Hoy, cuando el neoliberalismo se sostiene en el autoritarismo, urge recuperar la memoria de las luchas antifascistas del siglo XX y proyectarlas hacia el presente.

Milei, Bukele y Noboa son apenas rostros de una misma maquinaria. Si sus proyectos triunfan, el futuro de la región será la sumisión, la represión y la entrega. Si los pueblos logran reorganizarse, la alternativa será la vida digna, la soberanía y el socialismo. En esa disyuntiva nos encontramos.

La universidad y el movimiento estudiantil frente al neoliberalismo

es urgente consolidar plataformas amplias de convergencia popular, donde estudiantes, sindicatos, comunidades y colectivos culturales puedan articularse en una agenda común de defensa de lo público y la soberanía nacional.

La universidad, históricamente, ha sido un espacio de producción crítica y un campo de disputa de sentidos sobre la realidad social. Sin embargo, en los últimos años se ha visto arrastrada por una lógica neoliberal que amenaza con reducirla a un apéndice del mercado, funcional a los intereses de las élites económicas y políticas. Lo más preocupante es que, frente a los atropellos de este modelo, gran parte de la academia ha optado por el silencio cómplice, refugiándose en el tecnicismo y renunciando a su responsabilidad histórica con el pueblo.

Hoy más que nunca, el movimiento estudiantil debe asumir un rol protagónico. No basta con defender reivindicaciones gremiales o limitarse a la gestión corporativa: es imprescindible politizar la lucha estudiantil, reconocer la pertenencia de clase de quienes habitan la universidad y vincular sus demandas con las de trabajadores, campesinos e indígenas.

La herencia de la Reforma de Córdoba y la impulsada por Manuel Agustín Aguirre que buscaba una universidad para el pueblo y las tantas otras gestas estudiantiles en América Latina nos recuerda que la universidad no puede encerrarse en sí misma: debe ser tribuna de los oprimidos y catalizadora de transformaciones sociales.

El gobierno de Daniel Noboa ha desplegado una estrategia clara de persecución y amedrentamiento contra dirigentes sociales y estudiantiles. Las amenazas, seguimientos y procesos de criminalización no son hechos aislados, sino parte de un programa político que busca disciplinar la disidencia para consolidar la entrega del país al capital financiero internacional. Pretenden acallar voces jóvenes que cuestionan el dogma neoliberal y que denuncian el saqueo de lo público, porque saben la importancia del sector estudiantil y juvenil como parte de la resistencia.

Frente a este escenario, es urgente consolidar plataformas amplias de convergencia popular, donde estudiantes, sindicatos, comunidades y colectivos culturales puedan articularse en una agenda común de defensa de lo público y la soberanía nacional. No se trata únicamente de resistir, sino de disputar el sentido mismo de la universidad: ¿será espacio de reproducción del neoliberalismo o bastión de pensamiento crítico y emancipador?

La respuesta depende de la capacidad de organización y de lucha que construyamos hoy. Politizar al movimiento estudiantil no es una consigna vacía, sino la tarea indispensable para transformar la indignación en fuerza social, la rebeldía en proyecto histórico. Porque frente al neoliberalismo, la universidad no puede callar: debe gritar con fuerza junto al pueblo.

Venezuela bajo asedio: la verdad detrás de la militarización del Caribe y la narrativa imperial

la militarización del Caribe por Estados Unidos, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, es una estrategia imperialista. El verdadero objetivo es el control geopolítico de los recursos de Venezuela, repitiendo tácticas históricas de agresión. El pueblo venezolano responde con dignidad y soberanía.

Mientras el pueblo venezolano libra una lucha por la soberanía, la paz y la autodeterminación, una nueva ofensiva imperialista amenaza con reeditar viejas formas de dominación. Bajo el pretexto de la "lucha contra el narcotráfico", Estados Unidos y sus aliados han desplegado buques militares, submarinos nucleares y estructuras de guerra en el Caribe, activando una peligrosa escalada de tensiones que podría arrastrar a la región y al mundo a un conflicto de grandes proporciones.

La gran mentira del narcotráfico:

La narrativa que justifica esta intervención militar descansa en una acusación tan repetida como infundada: la supuesta vinculación del Estado venezolano con el narcotráfico. Sin embargo, informes oficiales de la ONU, de la DEA y de la Agencia Europea Antidrogas desmienten categóricamente esta afirmación. Venezuela no es un país productor ni un corredor principal de tránsito de drogas. Según los datos, menos del 5% de la droga latinoamericana transita por territorio venezolano, mientras que el 87% lo hace por la costa pacífica de Colombia y Ecuador.

Esto plantea una pregunta elemental pero contundente: ¿por qué entonces Estados Unidos despliega su maquinaria bélica en el Caribe vene-

zolano y no en el Pacífico donde se concentra el verdadero flujo del narcotráfico?

La respuesta es clara: el combate a las drogas es solo una excusa. El objetivo real es geopolítico: controlar el petróleo, los minerales estratégicos y los territorios soberanos de Venezuela, como lo demuestra el renovado interés en el territorio Esequibo, rico en hidrocarburos.

La historia se repite: del bloqueo de 1902 al asedio del siglo XXI:

No es la primera vez que Venezuela enfrenta un ataque de estas características. En 1902, potencias europeas como Reino Unido, Alemania y Francia impusieron un bloqueo naval para castigar al país por negarse a someterse a dictámenes arbitrarios. Lo mismo intentaron en 1999 pretendiendo usar la "ayuda humanitaria" como caballo de Troya para introducir tropas en suelo venezolano.

Hoy, con otras formas, el imperialismo revive sus viejos métodos. Bajo órdenes secretas del Pentágono, el gobierno estadounidense ha autorizado operaciones extraterritoriales para justificar una posible intervención militar. A esto se suma el aumento de recompensas contra líderes venezolanos y el mismo presidente Maduro, la fabricación de leyendas como el Cartel de los Soles, todo como parte de una estrategia de guerra híbrida.

Los verdaderos narcos: ¿quién compra, quién distribuye, quién consume?

Estados Unidos es, sin discusión, el mayor consumidor de drogas del planeta. Mientras tanto, las principales rutas del narcotráfico y los grandes carteles operan con complicidad o indiferencia en países aliados del imperio. ¿Dónde están las operaciones militares en suelo estadounidense para combatir el consumo masivo de fentanilo, heroína y cocaína?

La respuesta, otra vez, es clara: la guerra contra las drogas ha sido siempre una fachada para imponer agendas geopolíticas, como lo fue en Afganistán, como lo fue en América Central, como lo fue en Colombia. Hoy, Venezuela es el blanco.

Un pueblo movilizado, un Estado soberano:

Ante esta amenaza, el pueblo venezolano no se doblega. Millones de ciudadanos y ciudadanas se han movilizado en

jornadas de alistamiento cívico-militar. Las milicias populares se preparan, el gobierno ha denunciado formalmente ante la ONU la violación del Tratado de Tlatelolco y la Proclama de América Latina como Zona de Paz (CELAC, 2014). Venezuela, una vez más, responde con dignidad y organización.

Además, se ha instalado con Colombia una zona de paz binacional para frenar las mafias trasnacionales que pretenden utilizar la frontera como corredor del crimen. A diferencia de quienes siembran guerra, Venezuela construye soberanía con paz, y la defiende con firmeza.

Una convocatoria internacional:

Venezuela no está sola: La comunidad internacional tiene ante sí un desafío moral y político: denunciar la mentira, frenar la agresión y solidarizarse con el pueblo venezolano bajo una consigna clara: ¡Venezuela no es una amenaza, es una esperanza!

Hoy más que nunca, cuando la maquinaria mediática imperial busca silenciar las voces que resisten, es hora de alzar la voz y recordar que la paz, la soberanía y la autodeterminación no se negocian.

Desde el Partido Comunista Ecuatoriano expresamos nuestra solidaridad y nuestro firme compromiso para responder en unidad e internacionalismo a esta amenaza imperial; nuestra patria es américa.

Biblioteca marxista

Naomi Klein – La doctrina del shock.

Fundamenta el análisis de cómo las élites utilizan crisis económicas y sociales para imponer el recetario neoliberal.

Karl Polanyi – La gran transformación.

Aunque no marxista, ofrece claves para entender cómo la mercantilización total desgarra el tejido social.

Nicos Poulantzas – Estado, poder y socialismo.

Analiza cómo los aparatos estatales pueden ser espacios de disputa táctica, sin dejar de reproducir el orden capitalista.

Vicente Navarro – Medicina y sociedad.

Un análisis marxista sobre cómo las políticas de salud reflejan relaciones de clase.

Slavoj Žižek – En defensa de la intolerancia.

Crítica al liberalismo que fragmenta las luchas en causas aisladas, útil para el artículo Las causas sin ideología.

Enzo Traverso – Las nuevas caras de la derecha.

Explica cómo el fascismo muta en el siglo XXI bajo ropajes neoliberales.